



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: MARÍA BELÉN CÁRDENAS DE MEJÍA Y OTROS
Demandados: UNIÓN TEMPORAL NK-NK LAC-INAR Y OTROS
Procedencia: JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 103
Radicado n.º: 05001-31-05-013-2018-00517-01 (O2-20-100)

En Medellín, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213-2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación impetrado por la parte actora, dentro del proceso ordinario instaurado por **MARÍA BELÉN CÁRDENAS DE MEJÍA**, **ANDRÉS MEJÍA CÁRDENAS**, **DIANA CAROLINA MEJÍA CÁRDENAS** y **MAURICIO MEJÍA CÁRDENAS** en contra de la **UNIÓN TEMPORAL NK-NK LAC-INAR**, **INAR ASOCIADOS S.A.** y **NIPPON KOEI CO LTDA.**, con radicado n.º 05001-31-05-013-2018-00517-01 (O2-20-100).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

Mediante vocero judicial, pretenden **MARÍA BELÉN CÁRDENAS DE MEJÍA**, **ANDRÉS MEJÍA CÁRDENAS**, **DIANA CAROLINA MEJÍA CÁRDENAS** y **MAURICIO MEJÍA CÁRDENAS** que se declare que entre el fallecido **ANTONIO DE JESÚS MEJÍA MURILLO** y la parte demandada existió un contrato de trabajo del 3 de febrero de 2016 al 28 de agosto-2017, el cual finalizó por el fallecimiento del trabajador el último día, debido a un accidente de trabajo acaecido por culpa del empleador, y como consecuencia, se condene solidariamente los demandados a pagarles la indemnización total y ordinaria por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales irrogados en sus calidades de cónyuge e hijos

supérstites, respectivamente, así como las costas procesales; con fundamento fáctico en que MARÍA BELÉN CÁRDENAS DE MEJÍA contrajo matrimonio con ANTONIO DE JESÚS MEJÍA MURILLO el 14 de enero de 1969, producto de cuya unión procrearon a ANDRÉS MEJÍA CÁRDENAS, DIANA CAROLINA MEJÍA CÁRDENAS y MAURICIO MEJÍA CÁRDENAS; que el 3 de febrero de 2016 ANTONIO DE JESÚS MEJÍA MURILLO celebró contrato de trabajo a término indefinido con la UNIÓN TEMPORAL NK-NK LAC-INAR, conformada por las sociedades INAR ASOCIADOS S.A. y NIPPON KOEI CO LTDA.; que la demandada asumió el pago de los tiquetes aéreos y el transporte que necesitaba el causante para llegar a su sitio de trabajo, pues el mismo era oriundo del Departamento de La Guajira; que el 28 de agosto-2017, un señor de nombre Jadis Fabián Borrego Mejía recogió al *de cujus* en el aeropuerto de Santa Marta en el vehículo de placas HGO-075, propiedad de Jheimi Katrini Hernández Barros, servicio contratado por la demandada para llevarlo hasta el Municipio de Riohacha, pero que no contaba con seguro de responsabilidad contractual ni extracontractual; que a las 16:30 p. m. del mismo día, el vehículo se salió de la vía mientras transitaba por el Municipio de Dibulla del Departamento de La Guajira, colisionando contra un árbol, accidente que le produjo la muerte al señor MEJÍA MURILLO; que la pérdida de su cónyuge y padre, les ocasionó a los demandantes dolor, pesadumbre y aflicción, al tiempo que la cónyuge superviviente dependía económicamente del causante; y que la ARL POSITIVA le reconoció pensión de sobrevivientes a la cónyuge superviviente al estimar que la muerte se produjo por un accidente de trabajo.

1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 3 de septiembre-2018 (doc. 01 pág. 94), con el cual ordenó su notificación y traslado a la parte accionada.

Una vez notificada (ibíd. pág. 132), la UNIÓN TEMPORAL NK-NK LAC-INAR dio respuesta a la demanda a través de gestor judicial el 5 de abril-2019 (ibíd. págs. 133 y ss.), el cual aceptó como cierto la celebración de un contrato de trabajo con el causante el 3 de febrero de 2016; que la empresa se comprometió a sufragar el transporte del causante desde Medellín hasta La Guajira; que el 28 de agosto-2017 el causante abordó el vehículo contratado por la empresa de placas HGO-075, para llevarlo desde Santa Marta hasta Riohacha, trayecto en el que se presentó el accidente cuando el causante se desplazaba en el vehículo y el desenlace fatal; que se realizó la calificación laboral del accidente por la ARL, como el consiguiente reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge superviviente. En su defensa, se opuso a las pretensiones formuladas, por no obrar prueba alguna de las supuestas faltas y omisiones alegadas; y en ese norte, propuso las

excepciones de mérito que denominó: prescripción, buena fe, ausencia de responsabilidad, y ausencia de nexo causal.

1.2. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 28 de agosto de 2020 (docs. 13 y 14), oportunidad en la cual la cognoscente de instancia absolvió a las demandadas de todas las pretensiones incoadas por la parte actora, gravando en costas procesales a MARÍA BELÉN CÁRDENAS DE MEJÍA, ANDRÉS MEJÍA CÁRDENAS, DIANA CAROLINA MEJÍA CÁRDENAS y MAURICIO MEJÍA CÁRDENAS y a favor de las sociedades accionadas.

1.3. APELACIÓN

Decisión que fue recurrida oportunamente en apelación por la apoderada judicial de la parte actora, en cuyo sustento afirmó que a pesar de que no se determinó la causa del accidente, la ARL sí estableció unas recomendaciones al empleador para evitar los accidentes como el de marras, a más de que la unión temporal tenía la obligación de contratar un vehículo de transporte público de servicios especiales para el transporte de sus empleados, y no lo hizo, habida cuenta que el vehículo era de tipo particular; lo que aunado a la omisión del vehículo en tener póliza de responsabilidad extracontractual y a la falta de plan de seguridad vial en la empresa, demuestra la falta de diligencia y cuidado de la empresa en el cumplimiento de su obligación de seguridad para con sus empleados. Aduce que, si bien la testimonial da cuenta de que en La Guajira era muy difícil implementar las recomendaciones de la ARL, tales medidas de seguridad sí fueron implementadas por la empresa luego del año 2017, de lo que se sigue que sí estaban en posibilidad de implementarlas, pero que solo lo hicieron después del accidente fatal.

1.4. ALEGACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA

En el trámite de segunda instancia, el apoderado judicial de UNIÓN TEMPORAL NK-NK LAC-INAR, alegó que dada la falta de pruebas que permitan demostrar el motivo por el cual sucedió el accidente, y visto que se probó el cumplimiento de las normas laborales de seguridad y salud en el trabajo, no es posible declarar que existió una culpa suficientemente comprobada.

A su turno, la mandataria judicial de la parte actora, alegó que el daño antijurídico sufrido por el causante y sus familiares, es atribuible fáctica y jurídicamente a las empresas

demandadas, ya que fueron sus omisiones graves, y acciones erradas las que lo causaron, teniendo el deber jurídico de evitarlo a través de las actividades de prevención, vigilancia y control en la prestación del servicio de transporte a su empleado.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto la parte actora, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, para lo cual se plantea el análisis de los siguientes:

2.1. PROBLEMAS JURÍDICOS:

El *thema decidendi* en la presente Litis se centra en definir: ¿Si se configuró la culpa patronal del artículo 216 del CST, y por ende, si hay lugar a condenar al pago de la indemnización plena o total y ordinaria de perjuicios, junto con el pago de la indexación e intereses, y si debe nivelarse salarialmente al demandante? A efectos de lo anterior y en atención a las circunstancias relevantes que rodean la controversia, la Sala se ocupará en su orden, a dilucidar: i. Los elementos estructurantes de la responsabilidad patronal por culpa probada, y; ii. La carga de la prueba que incumbe a los contendientes judiciales en las controversias de esta naturaleza.

2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, en tanto que la parte actora no cumplió con el deber de probar, conforme lo estipulado en el artículo 167 del CGP, las causas del accidente, y de suyo no es posible determinar la culpa del empleador a partir de la estructuración del siniestro, para así tener por satisfechos los presupuestos que abren paso a la indemnización prevista en el artículo 216 del estatuto del trabajo, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1 Culpa Patronal

Sea lo primero señalar que a fin de resolver el escollo que plantea el presente asunto litigioso, en el que el trabajador o sus beneficiarios, tras el fallecimiento del primero, reclamen al empleador el reconocimiento de la indemnización total y ordinaria por

perjuicios, es un imperativo acudir a las previsiones legales contenidas en el artículo 216 del CST, que reza:

Artículo 216. Culpa del empleador. *Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo.*

2.2.1.1. Los elementos estructurantes definitorios de la indemnización ordinaria total de perjuicios por culpa patronal

Conforme con la disposición legal trasunta, corresponde al trabajador y sus beneficiarios demostrar los siguientes presupuestos fundamentales: (i) haber sufrido un accidente de trabajo o padecido una enfermedad profesional; (ii) el daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, y que tal afectación a su integridad personal o a su salud, (iii) se presentó o generó por culpa atribuible al empleador, por infracción a sus deberes de protección y seguridad contemplados en el artículo 56 del CST, deberes que le imponen al empleador “(...) *tomar las medidas adecuadas atendiendo las condiciones generales y especiales del trabajo, tendientes a evitar que el trabajador, como se dijo, sufra menoscabo en su salud e integridad a causa de los riesgos del trabajo.* (...)” y siendo que “(...) *La prueba suficiente de la culpa del empleador, corresponde asumirla al trabajador demandante, según las reglas de la carga de la prueba, (...), y teniendo en cuenta que de conformidad con lo consagrado en el art. 1604 del Código Civil la prueba de la «diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo», si el empleador pretende cesar o desvirtuar su responsabilidad debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquélla, tal como lo dispone el art. 1757 ibídem (...)*” (SL17058-2017).

Conforme lo dicho, se precisa que las obligaciones de protección y seguridad de que trata el artículo 57 del CST son de aquellas clasificadas por la doctrina y la jurisprudencia como de medios, por manera que, si bien es cierto que el riesgo laboral es inevitable en su ocurrencia al mostrarse consustancial a la relación laboral y ser en la práctica imposible que el dador de empleo elimine de manera total y absoluta la probabilidad de ocurrencia de infortunios laborales, también lo es que el juzgador en estos asuntos cuenta con la obligación de dilucidar y determinar con rigurosidad, si el empleador conocía los factores de riesgo a que estaba expuesto el trabajador, y, en caso afirmativo, ponderar si fueron considerados o implementados los controles para su mitigación, en la medida en que, aún

con el carácter de inevitable de algunos riesgos, no por ello deben postergarse o pretermirse las actividades tendientes a su prevención (SL1307-2014 y SL1073-2021)

Corresponde entonces a la parte demandante allegar los medios de persuasión tendientes a demostrar las circunstancias concretas que rodearon la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad laboral, la negligencia o desidia del empresario y el nexo de causalidad entre la conducta de este último y el infortunio (SL2799-2014, SL7181-2015, SL13653-2015, SL17058-2017 y SL5154-2020). Empero, excepcionalmente tal carga probatoria se invierte, trasladándose al empleador, cuando se denuncia como causal determinante del siniestro un comportamiento omisivo de los deberes de protección y seguridad que le debe al laborante, y siendo ello así, es a aquel a quien se reclama probar con suficiencia que sus acciones estuvieron revestidas de una debida diligencia y cuidado generando las condiciones de seguridad y protección adecuadas al trabajador ante los riesgos inherentes a la actividad contratada(SL13653-2015, SL7181-2015, SL7056-2016, SL12707-2017, SL2206-2019, SL2168-2019, SL2336-2020, SL5154-2020 y SL527-2023).

No obstante lo anterior, para que se configure la inversión de la carga de la prueba, el demandante debe probar el nexo de causalidad entre la contingencia y la conducta omisiva del demandado, y no limitarse a mencionar simplemente el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad, sino que por el contrario, se insiste, es “...*menester delimitar, allí mismo, en qué consistió la omisión que llevó al incumplimiento del empleador de las respectivas obligaciones derivadas del propio contrato de trabajo y de la labor prestada por el trabajador y la conexidad que tuvo con el siniestro, para efectos de establecer la relación causal entra la culpa y el hecho dañino, pues nadie está obligado a resarcir un daño sino cuando ha dado causa o contribuido a él(...)*”(SL-1897 de 2021).

A partir de lo anterior, en el *sub studium* tenemos que la parte demandante acreditó con suficiencia la ocurrencia de un accidente de trabajo y la producción de un daño en su integridad personal, en la medida en que además de ser aceptados tales hechos por la pasiva, encuentran igualmente estribo en las documentales incorporadas a la actuación judicial, vale decir, el informe de accidentes de trabajo del empleador o contratante radicado ante la ARL POSITIVA (doc. 02 pág. 2), el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo (doc. 02 pág. 8 y ss.); probanzas de las que se extrae con certeza que el señor ANTONIO DE JESÚS MEJÍA MURILLO, sufrió un accidente el 28 de agosto de 2018 en el Municipio de Dibulla, La Guajira, en desarrollo de sus servicios personales prestados a favor de la UNIÓN TEMPORAL NK-NK LAC-INAR, accidente que describió como:

“(…) EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA DESPLAZANDO DE SANTA MARTA HACIA RIOACHA POR CUESTION LABORAL EN UN VEHÍCULO CONTRATISTA CUANDO DE REPENTE PIERDE EL CONTROL Y SE ESTRELLA CONTRA UN OBJETO FIJO Y PIERDE LA VIDA JUNTO AL CONDUCTOR (…)”

Los anteriores hechos, en efecto se adecúan a la definición que de accidente de trabajo trae el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, disposición legal que se encontraba vigente a esa data, y así también se tuvo de presente en el dictamen para la determinación del origen de la ARL (doc. 02 PÁG. 6).

Probado como está, la muerte del trabajador (doc. 02 pág 108) a raíz de un accidente de origen laboral, resta entonces auscultar el nexo de causalidad entre el siniestro (daño) y la conducta omisiva del empleador que se denuncia en la litis.

El extremo litigioso activo insiste en que la sociedad UNIÓN TEMPORAL NK-NK LAC-INAR omitió (i) la obligación especial de contratar un vehículo de transporte público de servicios especiales para el transporte de sus empleados; (ii) la verificación de que el vehículo contratado tuviera póliza de responsabilidad extracontractual; y (iii) el establecimiento de un plan de seguridad vial en la empresa.

Para este efecto, la parte accionante se apoya en las recomendaciones que la ARL efectuó al empleador luego de la investigación del incidente laboral (doc. 01 pág. 283), las que por su pertinencia y para abundar en razones, se traen a colación:

NO	RECOMENDACIONES	FUENTE, APOYO, EMBALAJE	OT
1	CAPACITACION A CONDUCTORES Y ACOMPAÑANTES SOBRE MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDAD VIAL	T	
2	EVALUAR PERIODICAMENTE A CONDUCTORES SOBRE EFECTIVIDAD EN EL CONOCIMIENTO SOBRE MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDA VIAL	T	
3	DISEÑO Y SOCIALIZACION DE ESTANDARES Y PROTOCOLOS DE TRABAJO SEGURO PARA MOVILIZACIÓN	M, T	
4	REALIZAR INSPECCIONES PERIODICAS DE SEGURIDAD A LOS VEHICULOS ORIENTADAS A IDENTIFICAR CONDICIONES INSEGURAS QUE PUEDAN AFECTAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO	F	
5	REALIZAR PRUEBAS PSICOSOMETRICAS A LOS CONDUCTORES	T	
6	DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTION PARA FATIGA Y SUEÑO ASOCIADO A CONDUCTORES	M, T	

Empero, este medio de prueba no puede ser analizado de manera insular ni erigirse como único pilar que soporte la conducta omisiva que se le enrostra al empleador, como así lo

pretende la censura, sino que, por el contrario, debe ser analizado con los demás elementos de convicción regular y oportunamente allegados a esta procesal, para lo cual la Sala estima pertinente precisar que las recomendaciones en cita no demuestran, ni siquiera indican en forma alguna, la causa efectiva del infortunio laboral.

A *contrario sensu*, frente a la causa del accidente, el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo de la ARL únicamente indicó como posible factor personal, (i) el cansancio debido a la carga o duración de la tarea, o el conducir demasiado rápido o despacio; como posible factor laboral, la posible (ii) evaluación deficiente de la condición para operar, y como posible factor ambiental, (iii) el riesgo del tráfico (doc. 02 pág. 9). Concretamente, concluyó el grupo investigador que la primera hipótesis fuerte es un microsueño de parte del conductor, que generó un aumento de velocidad que produjo una pérdida de control que resultó en una reacción brusca que derivó en un derrape del vehículo hacía el costado izquierdo de la vía y el choque contra un árbol, o porque las condiciones adversas de lluvia y humedad presentes al momento del accidente, pudieron propiciar el hidroplaneo de las llantas del vehículo al tratar de cambiar de dirección o frenar bruscamente por cualquier circunstancia. Haciendo hincapié la Sala, en el hecho de que el informe en comento se refiere a estos hechos como posibles causas, pero que en ningún momento puedo establecer la causa efectiva del siniestro.

Ello así, en primer lugar refulge palmar que el empleador no pudo haber tenido control alguno sobre las posibles causas del accidente, toda vez que el vehículo no era conducido por uno de sus empleados, sino por un particular, siendo que dicho automóvil ni siquiera pertenecía a la compañía sino a un contratista arrendador (doc. 02 pág. 70); y habida cuenta que para la empresa tampoco era posible controlar las condiciones climatológicas del tráfico.

Máxime que en el *sub lite*, se advierte que las recomendaciones efectuadas por la ARL a la empresa, apuntan a prevenir o minimizar las posibles causas del accidente, más en ningún momento reflejan la real causa por la cual ocurrió el insuceso; de suerte que, de ninguna forma demuestran el nexo de causalidad entre la contingencia y la conducta omisiva del demandado al contratar un vehículo que no era de servicio público de transportes especiales, ni contaba con seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Es más, ha de relievase frente a tales recomendaciones, que luego de que la ARL las efectuara, el empleador procedió diligente al cumplimiento de las mismas (doc. 02. Pág. 131):

ETAPA 1 RECOMENDACIONES			ETAPA 2 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO			
No	RECOMENDACIONES	FORMA, PERÍODO Y FRECUENCIA	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE VERIFICACIÓN	EFECTOS
1	CAPACITACION A CONDUCTORES Y ACOMPAÑANTES SOBRE MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDAD VIAL	T	SP 24-25 26/10/17	Registro de asistencia Capacitaciones		
2	EVALUAR PERIODICAMENTE A CONDUCTORES SOBRE EFECTIVIDAD EN EL CONOCIMIENTO SOBRE MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDA VIAL	T	SP 25-26/ 10/2017	Evaluación a conductores		
3	DISEÑO Y SOCIALIZACION DE ESTANDARES Y PROTOCOLOS DE TRABAJO SEGURO PARA MOVILIZACIÓN	M, T	SP 01/10/ 2017	Procedimiento trabajo seguro y registro asistencia		
4	REALIZAR INSPECCIONES PERIODICAS DE SEGURIDAD A LOS VEHICULOS ORIENTADAS A IDENTIFICAR CONDICIONES INSEGURAS QUE PUEDAN AFECTAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO	F	SP 17/10/17	Formato inspección vehículos		
5	REALIZAR PRUEBAS PSICOSOMETRICAS A LOS CONDUCTORES	T	SP 05/09/17 04/10/17	Examen médico (concepto)		
6	DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN PARA FATIGA Y SUEÑO ASOCIADO A CONDUCTORES	M, T	SP 01/10/17	Programa fatiga y sueño		
OBSERVACIONES:						

Es de anotar en el *sub lite*, que de la prueba testimonial recaudada no se extrae ningún elemento de convicción sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente, por manera que resulta insuficiente en orden a establecer las causas del infortunio laboral.

Revisados entonces de manera integral los elementos de prueba arriba reseñados y que fueran arrimados al plenario, puede afirmarse que la decisión adoptada por la juzgadora de instancia se intima acertada, toda vez que, contrario a la sostenido por la censura, resulta evidente que los promotores de la litis no acreditaron la causa eficiente de la muerte del *de cujus*, de suyo que tampoco puede siquiera analizarse si dicha causa obedeció al incumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad industrial en relación con el transporte de laborantes hasta el lugar de la obra donde se prestaba el servicio.

Es de anotar en este punto, que si bien está probado que el vehículo de marras no era un transporte público de servicios especiales, no contaba con póliza de responsabilidad extracontractual, ni en la empresa se había implementado un plan de seguridad vial, pues así lo admitió la demandada en su contestación, resulta necesario que la parte actora demostre que tales hechos tienen relación con la causa efectiva del accidente, pues si bien el empleador estuvo en la posibilidad de revisar tales circunstancias, lo cierto es que no se probó que las mismas hubieren incidido en el fatal accidente.

El anterior ejercicio conclusivo se muestra consistente, si se considera que la parte actora no se preocupó siquiera por enunciar, con la precisión que se requiere, la hipótesis de la razón del accidente, por la cual existía un nexo causal entre éste y el actuar omisivo del empleador, olvidando que era su deber indicar al menos, dicho nexo de causalidad, o bien precisar lo indicado en los informes de investigación e indagaciones realizadas, en punto a establecer si la causa del accidente se dio por un microsueño o impericia del conductor o por el hidroplaneo producto de las condiciones climáticas, o por todas juntas, pero así no lo hizo, sino que se limitó a repetir las posibles causas del accidente que la ARL refirió en el

informe de investigación, tanto más cuanto que, para el desplazamiento del trabajador siniestrado del Aeropuerto de Santa Marta a Riohacha, sitio final de trabajo, no sólo existía la alternativa de contratar un vehículo de servicio público especial, como lo asegura y prefiere la litigiosa por activa, sino además usar el servicio público intermunicipal, o un vehículo particular o aun por cuenta del mismo trabajador, y que según sea el medio o servicio de transporte utilizado se pueda o no presentar un accidente automovilístico, dadas las condiciones climatológicas que predominaron el día y hora de los lamentables hechos.

Por lo esbozado y a pesar que no está en discusión que el siniestro acaeciera con ocasión del servicio, no es posible concluir que deba ser atribuida a la culpa comprobada del empleador a la luz del artículo 216 del CST, al no haberse podido acreditar la causa eficiente del accidente y, de consiguiente, el nexo causal entre el siniestro y las eventuales pretermisiones en que pudo haber incurrido el empleador, tal y como lo concluyó el cognoscente de instancia.

Como corolario de lo expuesto y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes descritas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió a la demandada UNIÓN TEMPORAL NK-NK LAC-INAR de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la parte actora, por las razones aquí esbozadas.

2.3. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de MARÍA BELÉN CÁRDENAS DE MEJÍA, ANDRÉS MEJÍA CÁRDENAS, DIANA CAROLINA MEJÍA CÁRDENAS y de MAURICIO MEJÍA CÁRDENAS, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, de conformidad con lo normado en el artículo 365 del CGP, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000, equivalente a un (1) SMMLV, y a favor de la UNIÓN TEMPORAL NK-NK LAC-INAR, de INAR ASOCIADOS S.A. y de NIPPON KOEI CO LTDA., suma que deberá ser cubierta de manera proporcional por los demandantes, en la misma entre los demandados.

Las de primera instancia se confirman, toda vez que no fueron materia de apelación.

2. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:


PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia materia de apelación proferida el 28 de agosto de 2020 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta sentencia.


SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de MARÍA BELÉN CÁRDENAS DE MEJÍA, ANDRÉS MEJÍA CÁRDENAS, DIANA CAROLINA MEJÍA CÁRDENAS y de MAURICIO MEJÍA CÁRDENAS, y a favor de la UNIÓN TEMPORAL NK-NK LAC-INAR, de INAR ASOCIADOS S.A. y de NIPPON KOEI CO LTDA., fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000, suma que de manera proporcional deberá cubrir los demandantes y en la misma forma en favor de los demandados. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio-2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.


Comuníquese y cúmplase.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado

(sin firma por ausencia justificada)
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario